

Minuta sobre proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

(BOLETÍN N° 16.316-05)

Origen: Cámara de Diputados

Iniciativa: Mensaje

Estado: Segundo trámite constitucional (Senado).

Síntesis. El proyecto tiene cuatro objetivos a saber:

- Crear el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, que tendrá por objeto contribuir a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado.
- Definir una nueva regulación para la auditoría interna gubernamental, fortalecer su carácter técnico e independiente, así como su institucionalidad y contar con una Política de Auditoría General de Gobierno.
- Crear un Consejo Consultivo de Auditoría Interna, órgano colegiado que asesorará al Auditor General de Gobierno en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.
- Otorgar reconocimiento legal a la Red de Auditoría Interna, conformada por auditores institucionales y los equipos de profesionales de auditoría interna y robustecer las unidades de auditoría interna de la Administración del Estado.

I. ANTECEDENTES

El mensaje subraya la creciente complejidad de las funciones de la Administración del Estado, donde el escrutinio constante por parte de la ciudadanía y diversos grupos sociales hace imprescindible que el gobierno actúe con responsabilidad, transparencia y eficiencia. En este marco, la auditoría interna gubernamental se posiciona como una herramienta esencial para garantizar que las metas de la administración se cumplan y que los recursos públicos se utilicen

de manera adecuada.

Señala que la auditoría interna no sólo agrega valor al evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión, sino que también contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos estatales y al fortalecimiento de la confianza pública. El documento señala que, aunque en Chile la auditoría interna ha estado regulada por normativas como el Decreto Supremo N° 12 de 1997 y el más reciente Decreto Supremo N° 17 de 2023, aún existe la necesidad de formalizar y fortalecer su institucionalidad a nivel legal, tal como lo han recomendado la OCDE y otros organismos internacionales.

Finalmente, señala que dado este contexto, se propone un proyecto de ley que busca consolidar la función de la auditoría interna gubernamental, recogiendo las mejores prácticas internacionales y asegurando que esta función crítica sea ejercida con las competencias técnicas necesarias. Este proyecto es fundamental para mejorar la rendición de cuentas, la gobernanza pública y, en última instancia, para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la gestión del Estado.

II. CONTENIDOS

PROYECTO DE LEY:

“PÁRRAFO 1°

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Créase el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, en adelante también “el Servicio” o “SAIG”, como un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente o Presidenta de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El domicilio del Servicio será la ciudad de Santiago.

Artículo 2.- El Servicio tendrá por objeto contribuir a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, a través de actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia

de auditoría interna, que contemplen el análisis de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia; del cumplimiento de las normas y procedimientos; de la protección de los recursos públicos y de la probidad; de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.

Para lograr dicho objeto, el SAIG será el órgano encargado de dirigir y coordinar la Red de Auditoría Interna, señalada en el párrafo 5°, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.

Artículo 3.- Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los órganos señalados en el inciso segundo del artículo 1 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con excepción de la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Consejo para la Transparencia, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades, las empresas públicas creadas por ley y las instituciones de Educación Superior de carácter estatal. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones exceptuadas en el inciso precedente podrán solicitar voluntariamente la asesoría del SAIG, lo que se materializará a través de la suscripción de uno o más convenios.

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

a) Actividades de Aseguramiento: Labores de auditoría que implican una revisión objetiva de los respectivos antecedentes, con el propósito de evaluar con independencia los procesos de gestión de riesgos, control interno y gobernanza de los órganos a que se refiere el artículo 3.

b) Actividades de Asesoramiento: Labores de consultoría, asesoría y servicios relacionados, que tienen por finalidad mejorar la gestión de riesgos, el control interno y la gobernanza de los órganos señalados en el artículo 3.

c) Auditor Interno Institucional: Es quien ejerce la máxima autoridad en la actividad de auditoría interna dentro de los órganos a que se refiere el artículo 3, responsable dentro de éstos de la gestión efectiva de dicha actividad. El nombre o denominación del cargo podrá variar en cada institución. En el caso de los auditores internos institucionales de los ministerios, les corresponderá, entre otras funciones, coordinar el trabajo de los auditores y las auditoras de la

respectiva Secretaría de Estado, en relación con los ámbitos de su competencia.

d) Auditoría Interna: Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoramiento, concebida para mejorar las operaciones de los órganos a que se refiere el artículo 3. Tiene por finalidad contribuir a que dichas entidades cumplan con sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar sus procesos de gestión de riesgos, control interno y gobernanza.

e) Control Interno: Proceso efectuado por todo el personal de alguno de los órganos señalados en el artículo 3, a fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos fijados dentro de las siguientes categorías: economía, eficiencia y eficacia; cumplimiento de las normas y procedimientos; protección de los recursos públicos y probidad; ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.

f) Economía: Capacidad de los órganos señalados en el artículo 3 para generar y administrar adecuadamente los recursos financieros, en el cumplimiento de su misión institucional.

g) Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la organización gubernamental, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. La calidad del servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia que se refiere a la capacidad de la organización gubernamental para responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios.

h) Eficiencia: Relación entre la producción de un bien o servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar aquellos. Se refiere a la ejecución de las acciones, beneficios o prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posibles.

i) Gestión de Riesgos: Proceso estructurado, consistente y continuo, implementado transversalmente en los órganos a que se refiere el artículo 3, con el fin de detectar, evaluar, medir y reportar amenazas que podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos, e identificar oportunidades para reducirlas.

j) Gobernanza: Combinación de sistemas, procesos y estructuras organizativas, implementados por quien ejerza la jefatura superior de los órganos señalados en el artículo 3, para informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de dicho órgano, con el fin de lograr sus

objetivos.

k) Lineamientos Técnicos: Conjunto de directrices, procedimientos y medidas, en materia de gobernanza, probidad, gestión de riesgos, control interno o auditoría interna, fijados por el SAIG dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 5.- El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno elaborará la Política de Auditoría General de Gobierno, en adelante también la “Política”, y la propondrá para su presentación y posterior aprobación del Presidente o de la Presidenta de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Durante la elaboración de la Política deberá considerar la opinión del Consejo Consultivo de Auditoría Interna, señalado en el artículo 12.

La Política es un instrumento que contiene los lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos que deben seguir los órganos señalados en el artículo 3, durante un período de cinco años.

Corresponderá al Servicio revisar la Política, al menos, a la mitad del período de su vigencia. De estimarlo necesario, propondrá su actualización al Presidente o a la Presidenta de la República.

Artículo 6.- Los órganos a los que se refiere el artículo 3 deberán elaborar un Plan de Auditoría Interna, que fijará el trabajo a desarrollar en materia de auditoría interna para un periodo de un año calendario, de acuerdo con los lineamientos estratégicos establecidos en la Política señalada en el artículo anterior. Dicho plan deberá individualizar cada trabajo específico que lo compone.

El Plan será aprobado por quien ejerza la respectiva jefatura superior de los órganos señalados en el artículo 3, previo informe técnico del Servicio, el que tendrá el carácter de vinculante.

PÁRRAFO 2º

Funciones y Atribuciones

Artículo 7.- El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Asesorar al Presidente o a la Presidenta de la República, a ministros o ministras, a

subsecretarios o subsecretarias y a las autoridades superiores de los órganos señalados en el artículo 3, en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.

b) Proponer a las personas señaladas en el literal a) normas, modelos, acciones e instrumentos que tiendan a fortalecer la auditoría interna, la gobernanza, el control interno y la gestión de riesgos de los órganos mencionados, y a promover la estricta observancia de la probidad administrativa y el debido uso de los recursos públicos asignados para el cumplimiento de sus programas y responsabilidades institucionales.

c) Proponer al Presidente o a la Presidenta de la República la Política de Auditoría Interna de Gobierno, para lo cual deberá previamente escuchar la opinión del Consejo Consultivo de Auditoría Interna.

d) Proponer al Presidente o a la Presidenta de la República modificaciones legales y reglamentarias en materias relacionadas con el ámbito de su competencia. e) Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de aseguramiento y asesoría en los órganos señalados en el artículo 3. Asimismo, revisar la correcta implementación de las recomendaciones surgidas en sus procesos de auditoría interna.

f) Realizar actividades de asesoría en los órganos señalados en el artículo 3, de forma transversal, y con especial énfasis en la revisión de la economía, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

g) Formular, adoptar o adaptar normas técnicas para las actividades de auditoría interna que realicen los órganos a que se refiere el artículo 3.

h) Asesorar técnicamente a los auditores internos institucionales y a equipos de auditoría interna, según corresponda, en la elaboración de los planes de auditoría interna de los órganos señalados en el artículo 3; evaluar sus resultados, otorgar retroalimentación de éstos, e informar de ellos al Presidente o a la Presidenta de la República.

i) Formular modelos y lineamientos técnicos sobre la base de las normas técnicas señaladas en el literal g).

j) Formular, adoptar o adaptar modelos de competencia, perfiles profesionales y programas de aseguramiento y mejora de la calidad, entre otros, en materia de auditoría interna para los órganos referidos en el artículo 3.

k) Formular esquemas de formación, capacitación y certificación profesional para los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, a través de normas, modelos y lineamientos técnicos relacionados con el ámbito de sus competencias. Asimismo, podrá realizar difusión técnica en tales materias y recomendar a los órganos referidos en el artículo 3 estrategias de capacitación para dichos funcionarios.

l) Informar a las personas indicadas en el literal a) sobre el nivel de cumplimiento del respectivo órgano, de los requerimientos del SAIG; de la aplicación de normas, modelos y lineamientos técnicos definidos por este último; de los resultados de los trabajos de aseguramiento y asesoramiento realizados; y del nivel de implementación de recomendaciones de auditoría y/o compromisos asumidos en sus respectivos planes de auditoría interna.

m) Contratar o convenir con personas naturales u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, la ejecución de trabajos específicos de aseguramiento y asesoramiento, y/o la realización de estudios, investigaciones y asistencia técnica.

n) Solicitar a los auditores institucionales y equipos de auditoría interna, según corresponda, la ejecución de actividades de aseguramiento y de asesoramiento específicas. o) Requerir a las personas a que se refiere el literal a), a los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, información general y específica en materias vinculadas a la auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos del respectivo órgano, servicio o entidad.

p) Proporcionar a las personas señaladas en el literal a), a los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, la evaluación técnica de las actividades que los respectivos órganos realizan en materia de auditoría interna.

q) Velar por la coordinación y cooperación técnica entre organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en el ámbito de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.

r) Propiciar y promover actividades de aseguramiento y asesoramiento en materias de probidad y transparencia administrativa, en el marco de la ley y los instrumentos internacionales vigentes al respecto, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos en la materia.

s) Cumplir con las demás funciones y atribuciones que le encomienden las leyes. El

Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, excepcionalmente, podrá realizar auditorías, a requerimiento del Presidente o de la Presidenta de la República, en los órganos señalados en el artículo 3. Lo anterior, salvo en los casos en que se encuentre en curso una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, en el mismo organismo y con los mismos objetivos.

Artículo 8.- El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno ejercerá sus funciones y atribuciones en coordinación con la Contraloría General de la República, y sin perjuicio de las facultades que constitucional y legalmente corresponden a esta última, en particular respecto a la dependencia técnica que ésta ejerce sobre los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 del decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República.

PÁRRAFO 3°

Organización y Estructura

Artículo 9.- La dirección superior, la organización y la administración del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno corresponderá al Auditor o Auditora General de Gobierno, quien será el jefe o la jefa superior del Servicio.

El Auditor o la Auditora General de Gobierno deberá contar con un título profesional o grado académico de licenciado o licenciada de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado, o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente, y acreditar una experiencia laboral en materias de auditoría interna no inferior a 10 años.

Artículo 10.- Al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno le será aplicable lo establecido en el Título VI de la ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Artículo 11.- El Auditor o la Auditora General de Gobierno tendrá especialmente, las siguientes funciones y atribuciones:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de jefe superior del Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos y las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el buen funcionamiento del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. c) Ejecutar los actos y celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá adquirir, administrar y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Delegar funciones o atribuciones específicas en funcionarios o funcionarias del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, en materias de gestión interna. e) Determinar, con sujeción a la planta y dotación máxima de personal, la estructura organizativa interna del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. f) Rendir cuenta anualmente de su gestión al Presidente o a la Presidenta de la República, a través de una memoria o balance institucional.

g) Remitir informes trimestrales al Presidente o a la Presidenta de la República que den cuenta de los principales hallazgos y compromisos para superarlos, derivados de los trabajos realizados en los órganos señalados en el artículo 3, en las materias propias de su competencia, con el objetivo de informar respecto del funcionamiento de dichos órganos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política de Auditoría General de Gobierno y de los planes de auditoría interna de dichas instituciones. Asimismo, manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la antedicha Política y en los planes de auditoría interna, y proponer medidas de corrección y mitigación. Copia de estos informes deberán enviarse al Ministro o Ministra de la Secretaría General de la Presidencia.

h) Considerar la opinión y los acuerdos del Consejo señalado en el artículo 12.

i) Cumplir las demás funciones y atribuciones que establezcan las leyes.

PÁRRAFO 4°

Del Consejo Consultivo de Auditoría Interna

Artículo 12.- Créase un Consejo Consultivo de Auditoría Interna, cuya función será asesorar al Auditor o a la Auditora General de Gobierno en materias de auditoría interna,

gobernanza, control interno y gestión de riesgos. En el cumplimiento de estas funciones deberá:

- a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones legales y reglamentarias en materias de su competencia.
- b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de normas, modelos, acciones e instrumentos que tiendan a fortalecer la auditoría interna, la gobernanza, el control interno y la gestión de riesgos.
- c) Opinar oportuna y justificadamente sobre el contenido de la Política de Auditoría General de Gobierno, propuesta por el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Las opiniones, pronunciamientos, estudios y propuestas del Consejo serán remitidos al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Deberán ponerse a disposición del público a través de la página web institucional del Servicio, en el plazo máximo de treinta días corridos desde dicha remisión.

El Auditor o la Auditora General de Gobierno podrá concurrir a las sesiones del Consejo y tendrá derecho a ser oído por el éste cada vez que lo estime conveniente. Artículo 13.- El Consejo estará constituido por tres personas, de vasta experiencia profesional y/o académica comprobada, en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y/o gestión de riesgos, designadas por el Presidente o la Presidenta de la República, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título VI de la ley N° 19.882, uno de las cuales será designada por el Presidente de la República como el Presidente o la Presidenta del Consejo.

Los consejeros o consejeras durarán en su cargo tres años, a contar de su nombramiento. Éste podrá prorrogarse por un período sucesivo, por una sola vez.

Artículo 14.- Quienes integren el Consejo tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a dos unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de seis sesiones por año calendario. Para tales efectos se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciba el consejero o la consejera. Los y las integrantes del Consejo que tengan que trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a sus sesiones, tendrán derecho a percibir un viático equivalente al que corresponda a un funcionario del grado 5 de la Escala Única de Sueldos.

Artículo 15.- La calidad de Consejero o Consejera será incompatible con el ejercicio de

los cargos de diputado o diputada, senador o senadora, delegado o delegada presidencial regional o provincial, alcalde o alcaldesa, concejal, gobernador o gobernadora regional, consejero o consejera regional, miembro del escalafón primario del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, funcionario o funcionaria de la Administración del Estado, funcionario o funcionaria del Banco Central de Chile, miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos.

Artículo 16.- Quienes integren el Consejo estarán inhabilitados, mientras sean parte de éste, para prestar servicios en materias de auditoría interna, procesos de gestión de riesgos, control interno y de gobernanza a los órganos señalados en el artículo 3.

Artículo 17.- Serán causales de cesación en el cargo de consejero o consejera las siguientes:

a) Expiración del período para el que fue nombrado.

b) Renuncia voluntaria.

c) Condena a pena aflictiva.

d) Incapacidad psíquica o física sobreviniente para el desempeño del cargo. e) Incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad a las que se refieren los dos artículos anteriores.

f) Incumplimiento grave y manifiesto de las normas sobre probidad administrativa. Se entenderá como tal el incumplimiento de las normas señaladas en el artículo 18, particularmente, el incumplimiento del deber de abstención.

g) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Se entenderá como falta grave, entre otras, la inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un mismo año calendario, así como el incumplimiento del deber de reserva y secreto establecido en el artículo 19.

Las causales establecidas en los literales d) y e) precedentes, serán declaradas mediante acuerdo adoptado por unanimidad de los miembros del Consejo, en el que no tendrá derecho a voto el(la) consejero(a) respecto del cual se pretendan hacer efectivas. En caso de no conseguir el quorum necesario, la causal se entenderá rechazada.

La verificación de las causales señaladas en los literales f) y g) será realizada por el resto

de los consejeros y consejeras, en sesión convocada especialmente para tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el reglamento.

Las vacantes serán proveídas mediante el mismo procedimiento de selección. El Consejo de Alta Dirección Pública dispondrá de un plazo de noventa días contado desde la vacancia del cargo, para proponer la terna al Presidente o a la Presidenta de la República. El nuevo miembro ejercerá sus funciones por un plazo de tres años.

Artículo 18.- A quienes integren el Consejo les serán aplicables las normas sobre probidad administrativa establecidas en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y particularmente, el deber de abstención establecido en el artículo 12 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Asimismo, les serán aplicables las normas contenidas en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, y en particular, estarán obligados u obligadas a realizar la declaración de intereses y patrimonio establecida en el Título II de dicha ley.

Artículo 19.- Quienes integren el Consejo deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información y documentos de los que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar en conformidad a la ley.

Artículo 20.- Para el buen funcionamiento del Consejo, el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno proporcionará el apoyo administrativo y de servicios, así como el personal que requiera para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 21.- El Consejo sesionará semestralmente, previa citación de su Presidente o Presidenta. De forma extraordinaria, podrá sesionar a requerimiento del Auditor o Auditora General de Gobierno.

Artículo 22.- El Consejo sesionará con la asistencia de, al menos, dos de sus integrantes y adoptará sus acuerdos con el voto favorable de los asistentes.

En caso que sólo asistan dos de sus integrantes, de no llegar a acuerdo resolverán la diferencia en la sesión siguiente mediante el voto de quien estaba ausente. Artículo 23.- Un

reglamento establecerá las demás normas de organización y funcionamiento del Consejo que sean necesarias.

PÁRRAFO 5°

Red de Auditoría Interna

Artículo 24.- La Red de Auditoría Interna será dirigida y coordinada por el Servicio y estará conformada por los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna. Tendrá por objeto una aplicación transversal de las materias de su competencia, en los órganos señalados en el artículo 3.

Artículo 25.- Los órganos señalados en el artículo 3 deberán contar con una Unidad de Auditoría Interna, la que debe incluir al menos dos funcionarios o funcionarias, quienes deberán cumplir con los perfiles técnicos y modelos de competencia definidos por el Servicio.

Las unidades de auditoría interna, conformadas por los auditores internos institucionales y los equipos auditoría interna, según corresponda, deberán prestar servicios de aseguramiento y asesoría en materias de gobernanza, gestión de riesgos y control interno en sus respectivas instituciones.

Artículo 26.- Los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna deberán proporcionar al SAIG la información que éste estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en el plazo que éste determine.

Artículo 27.- Los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna deberán desarrollar sus funciones con sujeción a las normas, modelos, acciones y lineamientos técnicos fijados por el SAIG. Asimismo, deberán concurrir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el SAIG y a las actividades de capacitación desarrolladas por éste.

Los funcionarios y las funcionarias a que se refiere el inciso anterior no podrán asumir responsabilidades de gestión dentro de los órganos en que desempeñen sus funciones, y deberán atenerse a los lineamientos que se dicten por el Servicio u otras entidades competentes, sobre conflicto de interés y probidad.

Artículo 28.- Los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna deberán realizar la declaración de patrimonio e intereses establecida en el Título II de la ley N°

20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

PÁRRAFO 6°

Patrimonio

Artículo 29.- El patrimonio del SAIG estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público y los recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales.

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales, que se le transfieran o que adquiriera a cualquier título.

c) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte con beneficio de inventario, las que estarán exentas del trámite de insinuación, a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones establecido en la ley N° 16.271 de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

d) Los aportes que reciba a cualquier título para el desarrollo de sus actividades por concepto de cooperación internacional.

Artículo 30.- El SAIG estará sometido al decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, y a sus disposiciones complementarias. PÁRRAFO 7°

Del Personal

Artículo 31.- El personal del SAIG se regirá por las disposiciones de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda y, en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su legislación complementaria.

Artículo 32.- El personal del SAIG deberá guardar absoluta reserva y secreto de la información y documentos de los que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar en conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan, en su caso, de conformidad a la ley.

PÁRRAFO 8°

Otras Disposiciones

Artículo 33.- Para el ejercicio de sus funciones, el SAIG podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos señalados en el artículo, y pedir toda la información y documentos necesarios para la revisión de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia, incluidos datos personales. Además, podrá realizar el tratamiento de dichos datos personales con el fin de ejercer el control, coordinación y supervisión en las materias de su competencia.

Artículo 34.- Las referencias que las leyes, reglamentos y demás normativa vigente hagan al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno o al CAIGG, se entenderán hechas al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno o SAIG, según corresponda.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Facúltase al Presidente o a la Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, establezca por medio de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y suscritos, además, por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. En el ejercicio de esta facultad deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y grados de la escala única de sueldos para ésta, podrá establecer la gradualidad en que los cargos serán creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Asimismo, podrá determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. Igualmente, determinará las normas necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas de encasillamiento de personal en las plantas que fije. Igualmente, podrá establecer el número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios y funcionarias

titulares de planta y a contrata desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Además, podrá determinar la forma en que se realizará el traspaso, y el número de funcionarias y funcionarios traspasados por estamento y calidad jurídica, y se podrá establecer, además, el o los plazos en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario o funcionaria traspasada se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima del personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso del personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

3. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije, del encasillamiento que se practique y de la iniciación de actividades del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, el cual podrá contemplar un período de implementación y otro de entrada en operaciones. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de dicho Servicio, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

4. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios y las funcionarias titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de su residencia habitual fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de quienes tengan un cargo titular de planta. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que les correspondan, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.

Dicha planilla mantendrá la misma impenibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c) Quienes sean traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. 5. Además podrá disponer el traspaso, en lo que corresponda, de toda clase de bienes desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

Artículo segundo.- El Presidente o la Presidenta de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno y traspasará a él los recursos necesarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que cumplan sus funciones. Asimismo, dicho decreto podrá crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, subtítulos, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo tercero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

Artículo cuarto.- El reglamento de la presente ley deberá dictarse en un plazo de ciento ochenta días, contado desde su publicación.

Artículo quinto.- El Consejo señalado en el artículo 12 deberá constituirse en el plazo de ciento ochenta días, contado desde la publicación de la presente ley. Para dicho efecto, el Consejo de Alta Dirección Pública deberá hacer las respectivas propuestas al Presidente o a la Presidenta de la República con al menos treinta días de anticipación al cumplimiento de dicho plazo, para lo cual deberá iniciar con la debida antelación los respectivos procesos.

Artículo sexto.- La primera versión de la Política establecida en el artículo 5 deberá ser propuesta para aprobación del Presidente o Presidenta de la República en el plazo de ciento ochenta días a contar de la constitución del Consejo señalado en el artículo 12.

Artículo séptimo.- El artículo 34 entrará en vigencia a contar de la fecha de entrada en operaciones del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.”.

III. COMENTARIOS.

El proyecto consta de treinta y cuatro artículos permanentes y siete disposiciones transitorias, y fue analizado y aprobado en general por los integrantes de la Comisión de Hacienda.

La formalización y fortalecimiento de la auditoría interna gubernamental son pasos cruciales para asegurar que los recursos públicos sean administrados con la mayor transparencia posible. En un contexto donde la ciudadanía demanda cada vez más información sobre cómo se gestionan los fondos del Estado, la auditoría interna se convierte en una herramienta indispensable para asegurar la probidad y la eficacia en la gestión pública.

La propuesta de formalizar la auditoría interna gubernamental responde directamente a las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, que han señalado la falta de una institucionalidad robusta en Chile en este ámbito. Adoptar estas sugerencias no solo alineará a Chile con las mejores prácticas internacionales, sino que también enviará una señal clara de compromiso con la modernización del Estado y la mejora continua en la gestión pública.

Es fundamental que la auditoría interna gubernamental se mantenga como una función independiente y objetiva. Esto garantiza que las evaluaciones sean imparciales y que las recomendaciones estén basadas en criterios técnicos y no en presiones políticas. La independencia de los auditores internos es crucial para preservar la integridad del proceso y para asegurar que los gobiernos actúen en beneficio del interés público.

Aunque el proyecto de ley para formalizar la auditoría interna es un avance positivo, su implementación efectiva requerirá voluntad política, recursos adecuados y la formación de profesionales capacitados. Es crucial que este proceso no se quede en meras intenciones legislativas, sino que se traduzca en acciones concretas que mejoren la eficacia y la transparencia

en la administración pública.

Un sistema de auditoría interna fortalecido puede tener un impacto significativo en la política fiscal del país, asegurando que los recursos se utilicen de manera más eficiente y que las políticas públicas se implementen de manera más efectiva. Esto podría resultar en una administración más ágil y en la posibilidad de redirigir fondos hacia áreas de mayor necesidad o impacto, lo que es fundamental en tiempos de limitaciones presupuestarias.

Minuta sobre proyecto de ley que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección de Aguas.

(BOLETÍN N° 16.504-33)

Origen: Cámara de Diputados

Iniciativa: Mensaje

Estado: Segundo trámite constitucional (Senado).

Síntesis. El proyecto tiene por objetivo perfeccionar los procedimientos de fiscalización en materia hídrica, otorgando nuevas herramientas legales a la Dirección General de Aguas para el cumplimiento de dicha tarea, particularmente, mediante la introducción de un procedimiento sancionatorio simplificado.

I. ANTECEDENTES

El mensaje aborda la importancia del agua en la vida humana y su protección legal en Chile. Se destaca que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano reconocido por el Estado, conforme a la ley N° 21.435, que reformó el Código de Aguas en 2022. Dado su valor, el agua recibe una protección jurídica especial, principalmente a través del Código de Aguas.

La Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, es la entidad encargada de la gestión, planificación, investigación, monitoreo y fiscalización de las aguas en Chile. En 2018, la ley N° 21.064 modificó el Código de Aguas, otorgando a la DGA mayores facultades sancionatorias, lo que permitió una fiscalización más efectiva y la imposición de multas por incumplimiento.

Desde la implementación de esta ley, la DGA ha iniciado numerosos expedientes de fiscalización, aumentando de manera sostenida cada año. Sin embargo, se han identificado desafíos en la implementación de estas medidas, como la complejidad en la notificación de las

partes y las limitaciones de un procedimiento sancionatorio único, que no se adapta a la diversa naturaleza de las infracciones ni a las particularidades de los territorios afectados por la sequía.

Por tanto, se proponen modificaciones al Código de Aguas para mejorar los procedimientos de fiscalización, proporcionando a la DGA nuevas herramientas legales para abordar estos desafíos y garantizar una gestión adecuada del agua en Chile.

II. CONTENIDO

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Aguas:

1. Incorpórase en el artículo 138 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto:

“A petición de la Dirección General de Aguas, las municipalidades u otros órganos de la administración del Estado, de conformidad con sus competencias, podrán ejecutar las medidas ordenadas de acuerdo a lo previsto en este artículo, en el artículo 299 ter o en otros artículos de este Código.”.

2. Sustitúyese el artículo 139 por el siguiente:

“Artículo 139.- Las notificaciones que la Dirección General de Aguas deba realizar en cualquiera de sus procedimientos administrativos se practicarán personalmente o a través de medios electrónicos, conforme con lo previsto en el artículo 46 de la ley N° 19.880.”.

3. Reemplázase en el numeral 2, denominado “2.- Normas Especiales”, del Título I del Libro Segundo el epígrafe del subtítulo “h.- De la fiscalización” por el siguiente: “h.- De la fiscalización y la vigilancia”.

4. En el artículo 172 quáter:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 172 quáter.- Cuando consten en el acta de inspección hechos que se estimen constitutivos de infracción, deberá notificarse personalmente al presunto infractor, de conformidad con el artículo 139, se adjuntará o acompañará copia del acta y se mencionará que podrá presentar sus descargos y los plazos para deducirlos.”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“El acta podrá ser notificada personalmente al presunto infractor si es que éste se encuentra en el lugar en que se realiza la inspección. En los casos en que ello no resulte posible, el funcionario ministro de fe encargado de la diligencia establecerá cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, de lo que dejará constancia en el acta, procederá a su notificación en el mismo acto, y entregará el acta a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar. Si, por cualquier causa, ello no fuere posible, la notificación se hará fijando, en lugar visible, un aviso que dé noticia de la fiscalización y copia del acta que se notifica. En caso que la habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo se encuentre en un edificio o recinto al que no se permite libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o encargado del edificio, y dejará testimonio expreso de esta circunstancia en el acta. El ministro de fe deberá georreferenciar las diligencias que realice lo cual deberá constar en el expediente sancionatorio que se apertura.”.

5. Sustitúyese el inciso primero del artículo 172 quinquies por el siguiente:

“Artículo 172 quinquies.- Evacuados los descargos o vencido el plazo para ello, la Dirección General de Aguas resolverá, sin más trámite, cuando no existan hechos controvertidos o sean de pública notoriedad. En caso contrario, abrirá un término de prueba de quince días. Dicho plazo podrá prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 19.880.”
Incorpórase, a continuación del artículo 172 sexies, los siguientes artículos 172 septies, 172 octies, y 172 nonies:

“Artículo 172 septies.- Se aplicará un procedimiento simplificado sancionatorio a los hechos investigados en que se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que sean sancionables con las multas expresadas en los literales a, b y c del artículo 173 ter.

2. Que se realicen en zonas de escasez hídrica declaradas y vigentes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 314.

3. Que no requieran la realización de fiscalización en terreno, como aquellas obligaciones comprendidas en los artículos 122 y 122 bis, entre otras.

Se excluyen de la aplicación de este procedimiento, en todos los casos, las infracciones sancionadas en el N°5 del inciso primero del artículo 173.

El procedimiento simplificado de fiscalización se sujetará a las siguientes reglas:

a) El procedimiento se iniciará con un acta de inspección que, junto con la formulación de cargos, señalará expresamente la aplicación de este procedimiento. El acta y las resoluciones sucesivas serán notificadas de conformidad a lo previsto en el artículo 139.

En los casos de los numerales 1 y 2 del inciso primero, el acta podrá ser notificada personalmente al presunto infractor si es que éste se encuentra en el lugar en que se realiza la inspección, y, en su defecto, podrá ser notificada de acuerdo a lo previsto en el artículo 172 quáter.

El acta deberá señalar el o los hechos por los cuales se formulan cargos al presunto infractor, indicando cada uno de los antecedentes y elementos en que se fundó la Dirección para la formulación de cargos.

b) El presunto infractor tendrá el plazo de ocho días hábiles, contado desde la notificación, para presentar sus descargos por escrito. En este acto el presunto infractor deberá acompañar todos los medios probatorios que sirvan de comprobante de su defensa. En el caso en que la infracción investigada trate de extracción de aguas no autorizadas, se deberá exhibir el título que justifique dicha extracción o bien los antecedentes escritos que comprueben que la extracción se realiza al amparo de derechos que existen por el solo ministerio de la ley.

c) Vencido el plazo indicado en la letra anterior, se procederá a elaborar el informe técnico. El plazo para ello será de treinta días si no se presentaron descargos o de cuarenta y cinco días, si es que se presentaron. Este informe servirá de antecedente para dictar la resolución que resuelva el procedimiento aplicando la sanción, cuando corresponda. El presunto infractor podrá allanarse a

los cargos formulados hasta antes de que venza el plazo para presentar sus descargos, caso en el cual se aplicará un 25% de descuento sobre el mínimo del grado de la multa que corresponda.

d) El Director General de Aguas, por medio de una resolución fundada, resolverá este expediente, y le pondrá término, en el plazo no superior a sesenta días hábiles contado desde que el expediente esté en condiciones de ser resuelto. Dicha resolución será notificada conforme al artículo 139.

e) En contra de la resolución de término del procedimiento sólo procederán los recursos de reconsideración y reclamación, dispuestos en los artículos 136 y 137. Para efectos de este artículo, el plazo para interponer el recurso de reconsideración será de quince días hábiles contado desde la notificación de la resolución de término. La interposición de estos recursos no suspenderá el cumplimiento de lo señalado en la resolución, sin perjuicio de que la Corte de Apelaciones respectiva pueda ordenar lo contrario en el caso del recurso de reclamación.

En todo lo no regulado expresamente por este artículo se aplicarán las normas generales del procedimiento sancionatorio ordinario dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 172 octies.- En aquellos casos en que se constate la existencia de una infracción por extracción de aguas no autorizada o se trate de obras o labores que puedan afectar a un acuífero que alimente vegas, turberas y bofedales, la Dirección General de Aguas deberá ordenar en la respectiva resolución de término la paralización de dicha extracción hasta su regularización o autorización, salvo que, por razones fundadas en el interés público, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 5, no se considere necesario.

Declarada esta medida, y sin más trámite, el personal de fiscalización procederá a la instalación de un sello u otro medio adecuado para evitar o inhibir la extracción de aguas no autorizada desde una obra de captación. La rotura del sello o del medio que se haya utilizado para evitar la extracción no autorizada de aguas será sancionada conforme al artículo 270 del Código Penal.

Para los efectos de este artículo, la Dirección General de Aguas podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138, en el lugar en que se realice la extracción de aguas no autorizada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, para los procesos de fiscalización iniciados en zonas de escasez hídrica declaradas y vigentes, o cuando dicha infracción pudiese afectar la disponibilidad de las aguas utilizadas para satisfacer el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, la Dirección General de Aguas también podrá ordenar, mediante resolución fundada, la paralización temporal de la extracción, aun cuando el procedimiento de fiscalización se encuentre pendiente, y podrá extenderse ésta hasta su total tramitación.

Artículo 172 nonies.- En conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del literal c) del artículo 299, la Dirección General de Aguas podrá, en el ejercicio de las labores de vigilancia, instruir medidas para la corrección temprana de inobservancias menores que hubiese constatado, con el fin de restituir el cumplimiento normativo en el más breve plazo, pudiendo, cuando corresponda, dar lugar a lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 octies.

Para estos efectos, se entenderán como inobservancias menores aquellos actos que impliquen desviaciones normativas de menor entidad. El Director General de Aguas dictará instrucciones para establecer los criterios que permitan determinar la entidad de dichos actos, de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 300.

La corrección temprana de inobservancias menores se sujetará a las siguientes reglas:

- a) No procederá en los casos en que una persona natural o jurídica haya sido sancionada con la aplicación de una multa de cuarto o quinto grado, conforme a lo previsto en el artículo 173 ter, durante los tres años inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento.
- b) Procederá por una única vez, en el lapso de un año contado desde la instrucción de la medida, respecto de un mismo titular.
- c) Se comunicará a la persona natural o jurídica, mediante acta, la inobservancia que debe subsanar y se fijará un plazo máximo de hasta treinta días hábiles para su corrección. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez y hasta por el mismo período.
- d) En caso de existir denuncias respecto a los hechos que son objeto de labores de vigilancia, éstas serán acumuladas a dicho procedimiento, debiendo la Dirección General de Aguas informar a los interesados todas las acciones que en ese contexto se realicen.

e) Vencido el plazo del literal c), la Dirección General de Aguas deberá concluir las labores de vigilancia, mediante la dictación de una resolución que dé cuenta del cumplimiento o que instruya la apertura de un expediente sancionatorio.

f) En contra de la resolución de término del procedimiento sólo procederán los recursos de reconsideración y reclamación, dispuestos en los artículos 136 y 137. Para efectos de este artículo, el plazo para interponer el recurso de reconsideración será de quince días hábiles, contado desde la notificación de dicha resolución.

7. Reemplázase el inciso tercero del artículo 176 por el siguiente:

“Si no se interpone el recurso de reconsideración en contra de las resoluciones de la Dirección General de Aguas que impongan sanciones pecuniarias, y se paga la multa establecida dentro del plazo de nueve días hábiles, contado desde la notificación de la resolución, se reducirá su valor en el 25%.”.

8. Agrégase el siguiente párrafo segundo en el literal c) del artículo 299:

“Se entenderá por labores de vigilancia, entre otras, aquellas efectuadas por funcionarios de la Dirección General de Aguas que tengan por objeto identificar inobservancias menores a las disposiciones del presente Código, y que puedan ser subsanadas sin la necesidad de ejercer las atribuciones de policía en el contexto de un procedimiento sancionatorio.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Mientras se implemente la gradualidad en la aplicación de la ley No 21.180, de transformación digital del Estado, conforme a lo señalado en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2020, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las notificaciones a las que alude el artículo 139 del Código de Aguas, se regirán por las siguientes reglas:

a) Se podrán realizar personalmente o por vía de correo electrónico. Para estos fines, se podrá utilizar la casilla de correo electrónico registrada en las bases de datos del Ministerio de Obras Públicas. En el caso de que no fuere posible, se notificará por carta certificada en el último domicilio registrado en el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

b) En el caso de que no conste una casilla electrónica en el expediente, en la presentación de los descargos, el presunto infractor deberá designar una casilla de correo electrónico para las sucesivas notificaciones. En el caso de no realizar esta designación, se entenderá notificado de las sucesivas resoluciones con su sola publicación en el sitio web institucional.

c) En su primera presentación el interesado podrá solicitar que las posteriores notificaciones se realicen de forma diversa. La notificación se realizará en la forma solicitada si fuere posible o mediante carta certificada al domicilio que debe consignar al realizar la solicitud.

d) Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

Artículo segundo.- Los procedimientos iniciados según el artículo 172 bis del Código de Aguas que se encuentren actualmente en tramitación, y aquellos expedientes que se aperturen antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de su iniciación.

Los presuntos infractores que sean parte de un procedimiento sancionatorio iniciado de conformidad con las normas vigentes con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley, y que se encuentren en los casos señalados en el artículo 172 septies del Código de Aguas, podrán voluntariamente someterse al nuevo procedimiento simplificado de ese artículo, siempre que formulen esta petición ante la Dirección General de Aguas al momento de presentar sus descargos.”.

III. COMENTARIOS.

El proyecto consta de un artículo único permanente que incluye ocho numerales y dos disposiciones transitorias, fue analizado y aprobado en general por los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y aprobado por la mayoría de los votos (145 a favor y 2 abstenciones) por la Cámara de Diputados.

La legislación chilena reconoce el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos, lo que impone al Estado la responsabilidad de garantizar estos derechos a todos los ciudadanos. Sin embargo, este reconocimiento coexiste con el uso del agua para fines

económicos, como la agricultura, la minería y la industria, lo que genera tensiones sobre la asignación y priorización del recurso.

Políticamente, esta situación puede dar lugar a conflictos entre comunidades que necesitan agua para subsistencia y grandes sectores económicos que dependen del agua para sus operaciones. La capacidad de la DGA para fiscalizar y sancionar es crucial para mediar en estos conflictos, pero también puede ser objeto de controversia si las sanciones afectan a actores económicos poderosos.

El desafío de gestionar el agua de manera eficiente y equitativa en un país con diversas realidades geográficas y climáticas sugiere la necesidad de una mayor descentralización y participación comunitaria en la toma de decisiones. Sin embargo, la legislación vigente parece centralizar el poder en la DGA, lo que podría limitar la capacidad de las comunidades locales para influir en la gestión de sus recursos hídricos.

Desde una perspectiva política, esto puede generar descontento en áreas rurales o en regiones que sufren desproporcionadamente los efectos de la sequía, aumentando las demandas por mayor autonomía en la gestión del agua.

Aunque las reformas recientes han fortalecido la capacidad sancionadora de la DGA, la complejidad de los procedimientos administrativos y la falta de adaptabilidad a distintas infracciones sugiere que podrían ser necesarias nuevas reformas. Políticamente, esto plantea un debate sobre hasta qué punto es necesario endurecer las regulaciones versus flexibilizar los procedimientos para casos de menor gravedad.

La introducción de procedimientos alternativos, como mecanismos de mediación o sanciones más leves para infracciones menores, podría ser una forma de aumentar la eficiencia y reducir la percepción de ineficiencia en la gestión del agua.

La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea establece un marco legal común para la gestión del agua en los Estados miembros, con un enfoque en la gestión integrada de cuencas hidrográficas. La directiva exige que los Estados miembros alcancen un “buen estado” para todas las aguas, considerando tanto aspectos cuantitativos como cualitativos.¹

¹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj?locale=es>

A diferencia de Chile, donde la fiscalización y sanción recaen en una única autoridad central, la Directiva Marco del Agua promueve la gestión a nivel de cuenca, lo que implica una mayor participación de autoridades locales y regionales. Esto podría inspirar reformas en Chile para descentralizar ciertos aspectos de la gestión hídrica.

Australia enfrenta desafíos similares a Chile en términos de escasez de agua y sequías prolongadas. Su sistema de gestión hídrica se caracteriza por un alto grado de descentralización y la existencia de mercados de agua, donde los derechos de agua son negociables.²

Aunque el modelo australiano es más orientado al mercado, ofrece lecciones sobre la importancia de la flexibilidad en la asignación de recursos hídricos y la necesidad de marcos regulatorios robustos que aseguren que los derechos de agua sean utilizados de manera sostenible.³

2

<https://www.infrastructure.gov.au/about-us/corporate-reporting/budgets/budget-2020-21/growing-strong-and-resilient-regional-australia/agriculture-water-and-environment>

3

<https://www.infrastructure.gov.au/about-us/corporate-reporting/budgets/budget-2020-21/growing-strong-and-resilient-regional-australia/agriculture-water-and-environment>

Minuta sobre proyecto de ley que modifica la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, estableciendo la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la agencia nacional de investigación y desarrollo, en el caso que indica.

(BOLETÍN N° 16.762-34)

Origen: Senado

Iniciativa: Mensaje

Estado: Primer trámite constitucional (Senado).

Síntesis. El proyecto tiene por objetivo establecer que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo no podrá adjudicar programas ni instrumentos a postulantes que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

I. ANTECEDENTES

El mensaje señala que la Ley N° 21.389 creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, marcando un cambio importante en la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus madres. Esta ley mejoró el cobro de deudas de pensiones alimenticias mediante la creación de dicho Registro, imponiendo obligaciones de consulta, retenciones y pagos a agentes públicos y privados. También estableció consecuencias para los deudores inscritos, como la retención de devoluciones de impuestos, el rechazo de solicitudes de pasaporte o licencia de conducir, y más. Según cifras de noviembre de 2023, el Registro ha sido eficaz, con 194.582 causas ingresadas en su primer año, 19.229 de las cuales fueron canceladas. Actualmente, más de 166 mil deudores están inscritos, siendo el 97% hombres.

II. CONTENIDO

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Introdúcense en la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el

artículo 7 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia, un artículo 35 bis, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 35 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, en ningún caso podrán ser declaradas admisibles las postulaciones ni ser adjudicados los programas y los diferentes instrumentos ejecutados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a quienes, al momento de la postulación y la adjudicación, respectivamente, tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Para lo anterior, al momento de la postulación y, adicionalmente, de la adjudicación, la Agencia deberá efectuar un proceso de consulta masiva electrónica al Servicio de Registro Civil e Identificación, que certificará en línea si el postulante y el presunto adjudicatario tiene una inscripción vigente en el referido Registro en calidad de deudor de alimentos.”.”.

III. COMENTARIOS.

El proyecto consta de un artículo único permanente, fue analizado y aprobado en general por los integrantes de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género.

El establecimiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en Chile, a través de la Ley N° 21.389, representa una respuesta robusta y proactiva a una problemática social de larga data: el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Esta medida puede verse como un reflejo de una tendencia global hacia el fortalecimiento de los mecanismos legales para proteger a los más vulnerables, particularmente niños, niñas y adolescentes, así como a las madres, quienes suelen ser las principales cuidadoras.

Esta ley envía un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad familiar y social. La inscripción en el Registro conlleva sanciones significativas, como la retención de devoluciones de impuestos y la imposibilidad de realizar trámites importantes (como obtener un pasaporte o registrar un vehículo). Estas medidas no solo buscan el cumplimiento, sino también subrayar que el cuidado de los hijos es una prioridad que trasciende las obligaciones financieras.

Si bien la ley es un avance en la protección de los derechos de los menores, también plantea un delicado equilibrio entre la protección y la sanción. El riesgo de estigmatización de

los deudores, aunque justificado desde una perspectiva de justicia, podría generar tensiones sociales y ser visto como un castigo desproporcionado en ciertos contextos. Es crucial que la implementación de la ley sea acompañada de mecanismos de rehabilitación y apoyo, para evitar que los deudores queden atrapados en una espiral de sanciones sin posibilidades de redención.

En España, se han implementado mecanismos similares, como el Registro de Morosos de Pensiones Alimenticias, que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Además, se contemplan sanciones administrativas y penales para quienes no cumplan con estas obligaciones. Sin embargo, la aplicación en España ha sido criticada por su lentitud y falta de eficacia en algunos casos, lo que subraya la importancia de no solo crear leyes, sino también asegurar su implementación efectiva.¹

En varios estados de EE. UU., existen medidas similares que incluyen la retención de salarios, la interceptación de reembolsos de impuestos, y la suspensión de licencias de conducir y pasaportes para los deudores de pensiones alimenticias. Además, en algunos estados se puede encarcelar a los padres que no pagan las pensiones. Sin embargo, estas medidas han generado controversia, especialmente en cuanto a su impacto en la capacidad de los deudores para ganarse la vida y eventualmente cumplir con sus obligaciones.^{2 3}

Argentina también ha adoptado medidas para abordar la falta de pago de pensiones alimenticias, incluyendo la creación de un registro de deudores y la posibilidad de sanciones como la prohibición de salir del país o realizar ciertos trámites. No obstante, la eficacia de estas medidas ha sido variable, dependiendo en gran medida de la capacidad de las autoridades locales para aplicar las sanciones de manera uniforme.⁴

La Ley N° 21.389 en Chile es un paso adelante en la protección de los derechos de los menores y sus madres, y es parte de una tendencia global hacia la adopción de medidas más estrictas para el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Sin embargo, es fundamental que

¹ Ministerio de Justicia de España. (2020). *Registro de Morosos por Pensiones Alimenticias: Análisis y efectividad*. Madrid: Gobierno de España.

² Child Support Enforcement Program. (2019). *Office of Child Support Enforcement Annual Report to Congress*. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services.

³ ONU Mujeres. (2021). *Género, justicia y derechos humanos en América Latina*. Nueva York: ONU Mujeres. Disponible en: www.unwomen.org

⁴ https://www.gba.gob.ar/justicia_y_ddhh/deudores_alimentarios

estas leyes sean implementadas con un enfoque que equilibre la justicia con la posibilidad de rehabilitación de los deudores, evitando que se conviertan en una herramienta de marginación social. La experiencia de otros países muestra que la eficacia de estas leyes depende no solo de su diseño, sino también de su implementación y el contexto socioeconómico en el que se aplican.

Minuta sobre proyecto de ley que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, y establece sanciones en caso de incumplimiento.

(BOLETÍN N° 16.598-15)

Origen: Cámara de Diputados

Iniciativa: Mensaje

Estado: Segundo trámite constitucional (Senado).

Síntesis. El proyecto tiene por objetivo establecer una prohibición para fabricar, comercializar, importar, exportar, utilizar, tener o portar dispositivos electrónicos que sean aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, considerando las excepciones que indica, y contempla las sanciones aplicables dependiendo de la gravedad del ilícito.

I. ANTECEDENTES

El mensaje señala que, el Índice Global del Crimen Organizado 2023 revela un panorama preocupante en América y, en particular, en Chile. Este informe, que mide la criminalidad en 193 países miembros de la ONU con una escala del 1 al 10, ubica a nuestro país con una puntuación de 5.18, ligeramente por debajo del promedio de América del Sur (5.94). Sin embargo, lo alarmante es el incremento reciente en nuestra puntuación, que ha subido 0.58 puntos, ubicándonos en el lugar 86 a nivel mundial. Esto refleja un aumento significativo en los niveles de criminalidad, especialmente en áreas como el comercio de cocaína, cannabis y el tráfico de armas.

El tráfico de armas es particularmente preocupante, ya que está directamente relacionado con el aumento de la violencia en la comisión de delitos. El crecimiento de la tasa de homicidios en nuestro país es un indicador claro de esta tendencia, lo que debe ser un llamado de atención

para todas las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Además, estamos presenciando un cambio en las tácticas del crimen organizado, que ahora hace uso de nuevas tecnologías para ejecutar sus delitos. Un ejemplo de ello es el uso de inhibidores de señales, dispositivos que interfieren con las telecomunicaciones, impidiendo que las víctimas puedan pedir auxilio. Estos dispositivos, utilizados por organizaciones criminales, están siendo cada vez más comunes, lo que agrava la situación de seguridad en el país. Sectores como el transporte ya han manifestado su preocupación, especialmente en relación con el robo de camiones, donde estos inhibidores de señales juegan un papel crucial.

A nivel internacional, organizaciones como la GMSA han advertido sobre el peligro de estos dispositivos, que pueden bloquear llamadas, GPS, Wi-Fi y otros servicios de comunicación esenciales. Países como México, Australia, Canadá, Italia y Reino Unido ya han tomado medidas para prohibir la fabricación, comercialización y uso de estos inhibidores, permitiendo su empleo únicamente a instituciones estatales específicas, como fuerzas de seguridad y centros penitenciarios.

Ante este escenario, es imperativo que Chile tome acciones decisivas. La creciente criminalidad y la sofisticación de las tácticas utilizadas por las organizaciones criminales demandan una respuesta firme y coordinada. Debemos considerar la implementación de una legislación que regule estrictamente el uso de estos dispositivos, alineándonos con las mejores prácticas internacionales. Proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y garantizar que el Estado cuente con las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado debe ser una prioridad nacional. Es hora de que tomemos medidas contundentes para frenar el avance de estas amenazas y asegurar un futuro más seguro para todos.

II. CONTENIDO

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Agrégase, en el artículo 36 B de la ley N° 18.168, General de

Telecomunicaciones, la siguiente letra h), nueva:

“h) El que infrinja lo dispuesto en esta letra.

Se prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia o porte de dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones.

Se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, a Gendarmería de Chile, a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y a aquellas reparticiones señaladas en el artículo 3 de la ley N° 19.863, sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública y da normas sobre gastos reservados, quienes podrán realizar las actividades señaladas en el párrafo primero, cuando así lo requieran, en el marco del ámbito de sus competencias y obligaciones, en conformidad con la ley.

El que fabrique, comercialice, utilice, tenga o porte uno o más de los dispositivos señalados en el párrafo primero, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales y comiso de los equipos, dispositivos e instalaciones.

El que utilizando estos dispositivos electrónicos interfiera, intercepte o interrumpa señales de naves, aeronaves o torres de control de tráfico aéreo; redes o servicios de telecomunicaciones de servicios esenciales o de aquellos de especial relevancia para el orden y seguridad pública, la defensa nacional o el sistema de inteligencia del Estado, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 100 a 5000 unidades tributarias mensuales.

La importación o exportación de los dispositivos descritos en el párrafo primero será sancionada de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 168, en relación con los numerales 2 y 3 del inciso primero del artículo 178, ambos del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas. En estos casos, si el valor de los dispositivos no excede de veinte unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y multa de dos a cinco veces el valor de la mercancía objeto del ilícito.

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, resultará aplicable lo dispuesto en los

artículos 188, 189 -con excepción de lo dispuesto en su inciso sexto-, y 190 del mencionado decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda.”.

Artículo transitorio.- No se aplicarán las penas establecidas en el artículo único de esta ley para la tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, a quien entregue voluntariamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tales dispositivos dentro del plazo de ciento veinte días contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, siempre que no se haya formalizado una investigación penal en su contra.”.”.

III. COMENTARIOS.

El proyecto consta de un artículo único permanente y una disposición transitoria, fue analizado y aprobado en general por los integrantes de la Comisión de Teletransporte y Telecomunicaciones

El reciente incremento en la puntuación de Chile en el Índice Global del Crimen Organizado es una señal de alerta que no puede ser ignorada. Este aumento refleja una tendencia preocupante hacia la consolidación del crimen organizado en nuestro país, lo que exige una respuesta rápida y decidida por parte de las autoridades.

El tráfico de armas ha sido identificado como un factor clave en el aumento de la violencia y la criminalidad en Chile. La proliferación de armas en manos de criminales no solo incrementa la letalidad de los delitos, sino que también erosiona la seguridad y la confianza de los ciudadanos. Es crucial que el gobierno implemente políticas más estrictas de control de armas y que se fortalezca la colaboración internacional para frenar el flujo de armas ilegales hacia el país.

La adopción de nuevas tecnologías por parte de las organizaciones criminales, como los inhibidores de señales, plantea un nuevo desafío para las fuerzas de seguridad. Estos dispositivos, que permiten a los criminales actuar con impunidad al interrumpir las comunicaciones de sus víctimas, subrayan la necesidad de actualizar nuestras leyes y mejorar las capacidades

tecnológicas de nuestras fuerzas de seguridad. Chile no puede quedarse atrás en la lucha contra el crimen tecnológico.

Países como México, Canadá e Italia ya han tomado medidas legales para prohibir o restringir el uso de inhibidores de señales, permitiéndolos sólo en casos específicos por parte de instituciones del Estado. Chile debe seguir su ejemplo y desarrollar un marco legal que regule estrictamente el uso de estas tecnologías, protegiendo así a los ciudadanos y asegurando que las herramientas de comunicación vitales no caigan en manos equivocadas.

La naturaleza transnacional del crimen organizado significa que ninguna nación puede enfrentarlo sola. Es imperativo que Chile refuerce su cooperación con otros países y organizaciones internacionales para combatir el tráfico de armas, drogas y la utilización de tecnologías ilícitas. Solo a través de un esfuerzo coordinado podremos dismantelar las redes criminales que operan dentro y fuera de nuestras fronteras.

La seguridad es uno de los pilares fundamentales de la confianza ciudadana en las instituciones. A medida que la criminalidad organizada se vuelve más sofisticada, es vital que el Estado demuestre su capacidad para proteger a los ciudadanos. La implementación de políticas efectivas que aborden tanto la violencia como la tecnología criminal no solo reducirá el crimen, sino que también restaurará la confianza pública en el gobierno.